

**VERSIÓN PÚBLICA DE LA RECOMENDACIÓN 112/1996**  
**MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE**  
**ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN:**

DATOS CONFIDENCIALES CLASIFICADOS	CLASIFICACIÓN	FUNDAMENTO LEGAL	PERIODO DE CLASIFICACIÓN	PÁGINAS
Narración De Hechos	<b>CONFIDENCIAL</b>	Artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a personas identificadas o identificables.	<b>INDEFINIDO</b> , en consideración al criterio directivo previsto en el Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, hasta en tanto las personas facultadas para ello, otorguen el consentimiento expreso al que hace referencia el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	1,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16
Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y terceros				1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Nombre de personas servidoras públicas encargadas de la administración y procuración de justicia, y/o encargadas de realizar labores de seguridad pública y nacional				2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18
Nombre de autoridades responsables				3,4,5,6,7,9,10,11,12,15,16,17,18
Dictamen médico				2,6,8,9,10,14
Domicilios en los que se advierta la fachada, casas vecinas e interior de inmuebles.				3,4,7,12,13,15
Edad				2,3,5,6,7,8,11,14,16
Parentesco				1,3,5,8,9,10

**Fecha de clasificación: 07 de julio y 08 de agosto de 2023**

**Unidad Administrativa Responsable: Segunda Visitaduría General**



## Comisión Nacional de los Derechos Humanos

**SÍNTESIS:** La Recomendación 112/96, del 14 de noviembre de 1996, se envió al Procurador General de la República, y se refirió al caso de los señores, [REDACTED] y otros.

La queja fue presentada por la señora [REDACTED], mediante la cual manifestó que agentes de la Policía Judicial Federal y agentes del Ministerio Público Federal, relacionados con la integración de la averiguación previa 359/994, [REDACTED]

[REDACTED] además de que los agentes policíacos [REDACTED]

La Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó que los agentes de la Policía Judicial Federal y el representante social federal responsable de la indagatoria citada, allanaron el domicilio de los agraviados, toda vez que no actuaron en apego de orden judicial alguna.

Por otra parte, la versión de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que el señor [REDACTED] murió con motivo del enfrentamiento suscitado cuando los elementos policíacos trataban de cumplir una supuesta orden de aprehensión, no es creíble en virtud de que de acuerdo con la fe de levantamiento de cadáver, el agente del Ministerio Público Federal hizo constar que [REDACTED]

.."

Asimismo, el representante social federal describió que en la habitación en la cual se encontró al hoy occiso, [REDACTED]

[REDACTED]"; sin embargo, no se dio fe de la existencia de otros casquillos percutidos en el suelo, situación que resulta contradictoria, ya que los agentes de la Policía Judicial Federal señalaron que el hoy occiso les [REDACTED]

Aunado a lo anterior, el peritaje en criminalística de esta Comisión Nacional indicó que al hoy occiso, el señor [REDACTED], se le encontró un [REDACTED], por lo que la [REDACTED]

asimismo, se advierte que el señor [REDACTED] presentó un [REDACTED], producido en vida por [REDACTED], lo que hace presumir que [REDACTED]; además, se advierte que [REDACTED]

Además, la posición en la que se localizó la pistola que supuestamente sujetaba el hoy occiso no es la original ni la inmediata al acontecer los hechos. Con esto se demuestra una clara manipulación de las evidencias, maniobras que tienden a confundir y distorsionar los hechos, con la pretensión de ocultar la verdad histórica.

En cuanto al representante social federal, éste sin realizar diligencia alguna dio por cierto lo manifestado por los agentes policiacos; consintió la detención ilegal de los agraviados, los recibió indebidamente en calidad de presentados; el 21 de octubre de 1994 decretó la detención del [REDACTED]; sin embargo, fue hasta el 23 de octubre de ese año cuando lo remitió al Consejo Tutelar para Menores Infractores en el Estado de Michoacán; no obstante que solicitó se practicara a varias personas la prueba de rodizonato de sodio, dicha orden no fue cumplida.

Se recomendó iniciar un procedimiento interno de investigación, con objeto de determinar la posible responsabilidad administrativa en que hubiesen incurrido los agentes del Ministerio Público que conocieron de la indagatoria mencionada. Asimismo, iniciar, integrar y resolver la respectiva averiguación previa por estos hechos; de resultar procedente, ejercitar la respectiva acción penal y dar inmediato y debido cumplimiento a la orden de aprehensión que se llegare a dictar.

Además, se recomendó iniciar un procedimiento interno de investigación en contra de los agentes de la Policía Judicial Federal que participaron en el operativo de referencia, respecto del homicidio de [REDACTED] y demás hechos presuntamente delictuosos. De igual manera, iniciar, integrar y resolver la correspondiente averiguación previa por estos hechos; de resultar procedente, ejercitar la acción penal respectiva y dar inmediato y debido cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.

### **Recomendación 112/1996**

**México, D.F., 14 de noviembre de 1996**

**Caso del señor [REDACTED]**

**Lic. [REDACTED],**

**Procurador General de la República,**

**Ciudad**

Muy distinguido Procurador:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 1o.; 3o., párrafo tercero; 6o., fracciones I y III; 15, fracción VII; 24, fracción IV; 26; 44; 46; y 51 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ha examinado los elementos contenidos en el expediente CNDH/122/95/MICH/3394, relacionados con el caso del señor [REDACTED], y vistos los siguientes:

## I. HECHOS

A. El 6 de junio de 1995, esta Comisión Nacional recibió escrito de queja presentado por [REDACTED], por medio del cual manifestó presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por servidores públicos de la Procuraduría General de la República en agravio de [REDACTED] y [REDACTED], las cuales hizo consistir en lo siguiente:

Que el 21 de octubre de 1994, aproximadamente a las 05:00 horas, elementos de la Policía Judicial Federal [REDACTED]

[REDACTED] donde se encontraba con [REDACTED] [REDACTED]; que a todos [REDACTED]; que venían con ellos [REDACTED]; que posteriormente escuchó [REDACTED]

[REDACTED]; que dichos agentes [REDACTED]

Indicó, también, que después de esa situación, [REDACTED]

[REDACTED] que al día siguiente [REDACTED]

[REDACTED] donde se enteró que [REDACTED]

[REDACTED]; que a [REDACTED] y a [REDACTED] y que a [REDACTED], [REDACTED]

Que el juez de la causa le dictó sentencia absolutorio a [REDACTED], [REDACTED], y que [REDACTED] también se encuentra libre, en virtud de que el Tribunal de Menores Infractores en el Estado de Michoacán lo dejó en libertad, lo que es una prueba plena de la inocencia de su familia y del homicidio de [REDACTED] por ello, solicitó que se investigue a los agentes de la Policía Judicial y agentes del Ministerio Público Federal que fabricaron los hechos y la averiguación previa 359/994".

B. Con motivo de la queja se inició el expediente CNDH/ 122/95/MICH/3394, y en el procedimiento de su integración se giraron los siguientes oficios:

i) El 14 de junio, 6 de julio, 19 de septiembre y 20 de octubre de 1995, mediante oficios V2/16959, V2/19779, V2/27769 y V2/31513, respectivamente, se solicitó a [REDACTED], Directora General de Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, un informe de los actos constitutivos de la queja, así como copia certificada de la causa penal 173/94, instruida en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, en el Estado de Michoacán, y duplicados de las fotografías que le tomaron al cadáver [REDACTED].

En respuesta, se recibieron los oficios 3445/95 D.G.S., 5816/95 D.G.S. y 6124/95 D.G.S., del 5 de julio, 11 y 27 de octubre de 1995, respectivamente, mediante los cuales se

remitió copias certificadas de la averiguación previa 359/994 y de la causa penal 1 73/94, así como las fotografías solicitadas.

El 19 de septiembre y 20 de octubre de 1995, mediante oficios V2/27768 y V2/3 1535, respectivamente, se solicitó [REDACTED], Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, un duplicado de las fotografías que se encuentran agregadas en la causa penal 173/94, instruida en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, en el Estado de Michoacán, mismas que fueron tomadas al hoy occiso por peritos de esa Procuraduría.

En respuesta., se recibieron los oficios E-7921 y 8065, del 3 y 25 de octubre de 1995, suscritos por [REDACTED], Comisionada en Derechos Humanos y Asesora del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, mediante los cuales remitió copia certificada de la averiguación previa 335/94-1, iniciada por el agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán.

**C.** Del estudio de las constancias que integran el expediente, destaca lo siguiente:

**1.** La averiguación previa 359/994, en la que se encuentran agregadas, entre otras, las siguientes actuaciones:

i) El parte informativo 057/94, del 21 de octubre de 1994, dirigido al agente del Ministerio Público Federal en turno en Uruapan, Michoacán, suscrito por los agentes de la Policía Judicial Federal, [REDACTED],

[REDACTED], así como por [REDACTED], comandante subdelegado y segundo comandante de la misma corporación, respectivamente, en el cual señalaron, entre otras cosas, lo siguiente:

Que el 21 de octubre de 1994, aproximadamente a las 05:00 horas, [REDACTED], agente del Ministerio Público Federal adscrito a Puestos de Revisión Carreteros (Precos) y un grupo de la Policía Judicial Federal [REDACTED]

[REDACTED]

Que al llegar al sitio, una vez tomadas las precauciones que el lugar ameritaba [REDACTED]

[REDACTED] y luego se [REDACTED] que de una de las casas [REDACTED]

Que dieron aviso de lo anterior [REDACTED], quien se encontraba [REDACTED]; que, posteriormente, se percataron que [REDACTED]

Que afuera [REDACTED] y que, según el dicho [REDACTED].

ii) El 21 de octubre de 1994, en la ciudad de Uruapan, Michoacán, [REDACTED] agente del Ministerio Público Federal, dio inicio a la averiguación previa 359/994, en contra de [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] y de quien resultara responsable, por los delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, homicidio y lo que resultara, dejando a [REDACTED] y [REDACTED] en calidad de [REDACTED] en las oficinas de esa Representación Social.

iii) Ese mismo día, el agente del Ministerio Público Federal, mediante oficio 213, solicitó apoyo a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán para que se elaboraran los dictámenes periciales sobre prueba química de rodizonato de sodio a los a-entes de la Policía Judicial Federal [REDACTED] así como a [REDACTED] y [REDACTED], sin que a la fecha de la elaboración del presente documento, se tenga noticia de que se haya practicado el peritaje solicitado.

iv) En la misma fecha rindió su declaración ministerial [REDACTED], quien, entre otras cosas, señaló:

Que el día de los hechos llegaron a su domicilio agentes de la Policía Judicial Federal, quienes [REDACTED]

[REDACTED] escuchando inmediatamente después [REDACTED]

[REDACTED] que posteriormente los agentes [REDACTED].

El 21 de octubre de 1994 rindió su declaración ministerial [REDACTED], en la cual, fundamentalmente, señaló:

Que el día de los hechos agentes de la Policía Judicial Federal [REDACTED] [REDACTED], cuando escuchó [REDACTED]

[REDACTED] que de inmediato escuchó [REDACTED]

[REDACTED] que, posteriormente, escuchó [REDACTED]

vi) El mismo día, el agente del Ministerio Público Federal decretó la detención legal del [REDACTED] y [REDACTED], argumentando que ante dicha Representación Social declararon que [REDACTED].

En la misma fecha, el agente del Ministerio Público Federal dio fe [REDACTED] [REDACTED] misma que se le encontró [REDACTED].

viii) El 22 de octubre de 1994, los elementos de la Policía Judicial Federal que suscribieron el parte informativo, lo ratificaron ante el representante social federal, sin hacer lo mismo los comandantes.

ix) El 23 de octubre de 1994, [REDACTED], agente del Ministerio Público Federal, adscrito a Precos, elaboró el acta circunstanciada de los hechos en comento, en la cual señaló, entre otras cosas, que el día de los hechos, [REDACTED] o [REDACTED], [REDACTED] fue informado de que se había suscitado [REDACTED].

Que ante tal eventualidad, lo tenso de la situación y la hora en que actuaban, [REDACTED] [REDACTED]; que por mera precaución y a fin de asegurar su retiro de ese sitio, [REDACTED] [REDACTED].

Ese mismo día, [REDACTED] agente del Ministerio Público Federal, adscrito a Precos, también elaboró la fe de levantamiento del cadáver [REDACTED] [REDACTED], en la cual señaló, entre otras cosas, lo siguiente:

Que en el lugar de los hechos [REDACTED]

xi) El dictamen pericial sobre prueba química de walker en arma (sic), que rindió la perito [REDACTED] de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán,

en el cual se determinó que [REDACTED]

xii) El dictamen periciaj sobre prueba química de rodizonato de sodio que rindió la perito antes descrita. en el cual concluyó que el hoy occiso [REDACTED] [REDACTED] recientemente a la fecha de los hechos.

xiii) El 23 de octubre de 1994, [REDACTED], agente dej Ministerio Público Federal, concedió [REDACTED] y [REDACTED] el beneficio de la libertad provisional bajo caución.

xiv) En la misma fecha, el citado agente del Ministerio Público Federal acordó remitir a [REDACTED] al Consejo Tutelar para Menores Infractores en el Estado de Michoacán, por haberse acreditado [REDACTED]

xv) El 23 de octubre de 1994, el agente del Ministerio Público Federal determinó ejercitar acción penal en la averiguación previa 359/994, en contra [REDACTED] como probable responsable del delito contra la salud, en las modalidades de posesión de marihuana y semilla de marihuana; de [REDACTED], como probable responsable del delito de portación de arma de fuego reservada para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; [REDACTED] y [REDACTED], como [REDACTED] del delito de portación de arma de fuego sin licencia.

En dicha consignación, el representante social federal, al hacer el estudio de los elementos del tipo y la probable responsabilidad penal del delito de homicidio en agravio [REDACTED], señaló entre otras cosas, lo siguiente:

Que los elementos del tipo penal en el delito de homicidio en agravio [REDACTED] [REDACTED] se encuentran debidamente acreditados, ya que [REDACTED] sin embargo, [REDACTED], debido a que [REDACTED] agentes de la Policía Judicial Federal, las personas que se encontraban en [REDACTED] lejos de hacer lo ordenado, [REDACTED]

## 2. La causa penal 173/94, de la que se desprende lo siguiente:

i) El 23 de octubre de 1994, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán determinó la detención legal [REDACTED], por los delitos consignados por el representante social federal.

ii) El 24 de octubre de 1994, [REDACTED] rindió su declaración preparatoria, en la que manifestó [REDACTED] y por lo que hace a su declaración ministerial, señaló [REDACTED]



[redacted] ya que el día de los hechos [redacted] y en seguida escuchó [redacted], pero no pudo precisar [redacted] y, en ese lapso, escuchó [redacted]

Asimismo, agregó que los agentes [redacted]

iii) En la misma fecha, el agente del Ministerio Público Federal entregó al juez de la causa diversa documentación, de la cual destaca la averiguación previa número 335/94-1, iniciada en la Agencia Primera Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común en Apatzingán, Michoacán, por el delito de homicidio en agravio [redacted] y en contra de quien resulte responsable, la cual se inició en auxilio del agente del Ministerio Público federal. indagatoria que le fue entregada al representante social federal el 23 de octubre de 1994, mediante oficio 1194, misma que se acumuló a la averiguación previa 359/94, en la que destacan, entre otras actuaciones, las siguientes:

El acta de descripción, media filiación y fe ministerial de lesiones [redacted], del 21 de octubre de 1994, que realizó [redacted] agente del Ministerio Público del Fuero Común de Apatzingán, Michoacán, en la cual señaló en su parte conducente que:

[redacted]

Los dictámenes periciales criminalísticos de inspección de cadáver y la necropsia del 21 de octubre de 1994, elaborados por la criminalista [redacted] y los doctores [redacted], médicos forenses adscritos a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría antes mencionada, en los cuales asentaron, entre otras cosas, lo siguiente:

[redacted]

iv) El 27 de octubre de 1994, [redacted] rindió su atestado ante el juez de la causa, en el cual señaló que el día de los hechos [redacted], ya que [redacted]; que respecto de [redacted]

[REDACTED]

v) El 28 de octubre de 1994, el juez del conocimiento resolvió en el plazo constitucional la situación jurídica de [REDACTED], decretando auto de formal prisión [REDACTED] y [REDACTED], así como orden de presentación [REDACTED] y [REDACTED], como [REDACTED] de los mismos delitos por los que ejercitó acción penal el agente del Ministerio Público Federal.

vi) El 21 de noviembre de 1994, [REDACTED] rindió su testimonial ante el juez de la causa, en el cual señaló que el día de los hechos [REDACTED]

[REDACTED]

vii) El 21 de noviembre de 1994, [REDACTED] rindió su testimonio ante el juez de referencia, en el cual manifestó que el día de los hechos [REDACTED]

[REDACTED]

viii) El 15 de marzo de 1995, el juez del conocimiento dictó sentencia en la causa penal 173/94, determinando que [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] de la comisión de los delitos, el primero de los nombrados, de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales; el segundo y tercero, de portación de arma de fuego de las permitidas a los particulares con previa licencia, y [REDACTED] no es penalmente responsable del delito contra la salud, en su modalidad de posesión de marihuana y semillas del mismo estupefaciente. Esta última parte de la sentencia fue apelada, el 16 de marzo de 1995, por el representante social federal.

ix) El 30 de mayo de 1995, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, resolvió en el toca penal 148/95 confirmar la sentencia del juez de la causa.

**3.** El 1 de noviembre de 1995, se solicitó a un perito de esta Comisión Nacional un dictamen criminalístico con relación al presente caso, a fin de determinar la mecánica de cómo sucedieron los hechos en estudio, en el que señaló, con base en los dictámenes, constancias y fotografías que existen en el expediente, lo siguiente:

i) El desarrollo de los hechos en que perdió la vida [REDACTED], de acuerdo con las declaraciones ministeriales contenidas en autos del expediente, se desprende que se llevó a cabo en el interior de su habitación, por la existencia de huellas de forcejeo, la presencia de restos de tierra en las ropas y en el cuerpo [REDACTED], así como por el desorden no común en el interior de la recámara.

El lugar donde se encontró [REDACTED], que se relaciona y que traía [REDACTED] [REDACTED] en el lugar de los hechos, no es el lugar original ni inmediato al acontecer éstos, ni es compatible con una dinámica posesiva secundaria a disparo de proyectil de arma de fuego que lesionó [REDACTED] las

[REDACTED]

[REDACTED]

En el lugar de los hechos se dieron [REDACTED]  
[REDACTED], así como por [REDACTED]

iv) [REDACTED]

[REDACTED]

vi) La muerte [REDACTED] no se debió a un enfrentamiento sucedido entre [REDACTED] y los agentes de la Policía Judicial Federal que participaron en el hecho, por los razonamientos antes descritos.

## II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1. El escrito de queja recibido en esta Comisión Nacional el 6 de junio de 1995, por medio del cual [REDACTED] denunció presuntas violaciones a los Derechos Humanos de [REDACTED] y [REDACTED].

2. Los oficios 3445/95 D.G.S., 5816/95 D.G.S. y 6124/95 D.G.S., del 5 de julio, 11 y 27 de octubre de 1995, respectivamente, firmados por [REDACTED] Directora General de Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, a los cuales acompañó las fotografías solicitadas, así como la copia certificada de la causa penal 173/94, seguida ante el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, de la que se destacan las siguientes constancias:

i) El parte informativo 057/94, rendido por elementos de la Policía Judicial Federal.

ii) El oficio 213, mediante el cual el representante social federal solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, la práctica de los dictámenes periciales sobre prueba de química de rodizonato de sodio a los agentes de la Policía Judicial Federal que firmaron el parte informativo de referencia, así como también [REDACTED]

iii) La declaración ministerial de [REDACTED] y [REDACTED], del 21 de octubre de 1994.

iv) Acta circunstanciada de hechos, del 21 de octubre de 1994, suscrita por [REDACTED], a-ente del Ministerio Público Federal adscrito a Precos.

v) Fe de levantamiento de cadáver [REDACTED], del 21 de octubre de 1994, realizada por [REDACTED].

iv) Los dictámenes periciales sobre prueba de química de Walker en arma de fuego (sic,) y de rodizonato de sodio, del 21 de octubre de 1994, emitidos por [REDACTED] perito en criminalística de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.

v) Ratificación de 22 de octubre de 1994, por 10 de los 12 elementos de la Policía Judicial Federal que suscribieron el parte informativo ante el representante social federal.

vi) El acuerdo del 23 de octubre de 1994, en el cual el agente del Ministerio Público Federal remitió [REDACTED] al Consejo Tutelar para Menores en Morelia, Michoacán, por haberse acreditado [REDACTED]

vii) La determinación de la averiguación previa 359/994, del 23 de octubre de 1994, donde se propuso el ejercicio de la acción penal en contra [REDACTED], como probable responsable del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana y semilla de marihuana: [REDACTED], como probable responsable del delito de portación de arma de fuego reservada para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea [REDACTED] y [REDACTED], como probables responsables del delito de portación de arma de fuego sin licencia.

x) La declaración preparatoria [REDACTED], del 24 de octubre de 1994.

xi) Acta de descripción, media filiación y fe ministerial de cadáver [REDACTED], así como los dictámenes periciales de inspección de cadáver, necrocirugía y acta de defunción de la persona antes mencionada; documentales que fueron presentadas ante el juez de la causa, el 24 de octubre de 1994, por [REDACTED], agente del Ministerio Público Federal.

xii) La declaración [REDACTED] ante el juez de la causa el 27 de octubre de 1994.

xiii) Los atestados del 21 de noviembre de 1994, rendidos por [REDACTED] y [REDACTED].

xiv) La sentencia, emitida el 15 de marzo de 1994, por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, en el proceso penal 173/94.

xi) La resolución del 30 de mayo de 1995, emitida por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, en el tomo penal 148/95, confirmando la sentencia del juez de la causa.

xii) El dictamen en materia de criminalística del 13 de marzo de 1996, emitido por un perito de esta Comisión Nacional.

### III. SITUACIÓN JURÍDICA

El 21 de octubre de 1994, se inició la averiguación previa 359/994, en contra de [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED]. Este último, el 23 de octubre de 1994, fue remitido por el agente del Ministerio Público Federal al Consejo Tutelar para Menores Infractores en el Estado de Michoacán, y actualmente se encuentra libre.

El 23 de octubre de 1994, el a-ente del Ministerio Público Federal determinó el ejercicio de la acción penal en la averiguación previa 359/994, en la cual se señaló que al hacer el estudio de los elementos del tipo y la probable responsabilidad penal del delito de homicidio en agravio de [REDACTED], se llevó a la convicción de que operó la excluyente de incriminación "cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho", en favor de los agentes de la Policía Judicial Federal que participaron en el operativo en comento; asimismo, determinó ejercitar acción penal en contra de [REDACTED], como probable responsable del delito contra la salud, en las modalidades de posesión de marihuana y semilla de marihuana; de [REDACTED], como probable responsable del delito de portación de arma de fuego reservada para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; de [REDACTED] y [REDACTED], como probables responsables del delito de portación de arma de fuego sin licencia.

El 23 de octubre de 1994 se inició la causa pena; 173/94 ante el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, quien dictó sentencia el 15 de marzo de 1994, determinando dejar en libertad a [REDACTED] por el delito contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana y semilla de marihuana, y encontrando penalmente responsables a [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED], por los delitos por los cuales se ejercitó acción penal en su contra.

Asimismo, el agente del Ministerio Público Federal interpuso el recurso de apelación, por lo que, el 30 de mayo de 1995, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito resolvió, en el toca penal 148/95, confirmar la sentencia de referencia.

### IV. OBSERVACIONES

Del estudio y análisis de las constancias que integran el expediente que se resuelve, se desprende que existen situaciones contrarias a Derecho, en atención a las siguientes consideraciones:

**A.** La Procuraduría General de la República indicó que agentes de la Policía Judicial Federal se presentaron en [REDACTED] Municipio de Apatzingán, Michoacán, para dar cumplimiento a la orden de aprehensión con fines de extradición internacional en contra del señor [REDACTED]. Al respecto, cabe señalar que, en la causa penal 173/94, no se encontró ni la orden de aprehensión aludida ni tampoco orden de cateo alguna; por lo tanto, no existe evidencia que sustente tal circunstancia.

Por lo anterior, los agentes de la Policía Judicial Federal y el licenciado [REDACTED], agente del Ministerio Público Federal contravinieron lo establecido en el artículo

16 de la Constitución General de la República, en virtud de que cometieron actos arbitrarios en contra de la familia [REDACTED], ya que allanaron su domicilio, sin orden debidamente fundada y motivada de autoridad competente. El precepto citado en su parte conducente establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..."

Con tal conducta, los servidores públicos de la Procuraduría General de la República violaron lo dispuesto en los artículos 225, fracción XVI 11, y 285 del Código Penal Federal, que en lo conducente se señala:

225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

[...]

Fracción XVIII. Ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley.

285. Se impondrán de un mes a dos años de prisión y multa de 10 a 100 pesos, al que, sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita, se introduzca furtivamente, o con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo a una casa habitada.

**B.** Por otra parte, esta Comisión Nacional considera que la versión de los hechos presentada por la Procuraduría General de la República, en el sentido de que el señor [REDACTED] falleció con motivo del "enfrentamiento" suscitado cuando elementos de la Policía Judicial Federal supuestamente trataban de cumplimentar la orden de aprehensión citada, resulta inconsistente, en atención a los siguientes razonamientos:

i) La Procuraduría General de la República ha reiterado que, el 21 de octubre de 1994, cuando agentes de la Policía Judicial Federal se presentaron al [REDACTED] Municipio de Apatzingán, Michoacán, a fin cumplir una orden de aprehensión, el señor [REDACTED] salió de [REDACTED]; sin embargo, en la fe de levantamiento de cadáver, el agente del Ministerio Público federal hizo constar que "[REDACTED]

.."

Asimismo, el representante social federal describió que en la habitación en la cual se encontró al hoy occiso, había [REDACTED]

[REDACTED] sin embargo, no se dio fe de la existencia de otros casquillos percutidos en el suelo, situación que resulta contradictoria, ya que los agentes de la Policía Judicial Federal señalaron que el hoy occiso [REDACTED]

ii) Aunado a lo anterior, el peritaje en criminalística de esta Comisión Nacional indicó que al hoy occiso, señor [REDACTED], se le encontró [REDACTED], por lo que la [REDACTED] asimismo, se advierte que el señor [REDACTED] presentó [REDACTED], lo que hace presumir que [REDACTED]: además, se advierte que en el lugar de los hechos se [REDACTED]. En consecuencia, no es creíble que se hubiere suscitado el supuesto "enfrentamiento".

iii) Se detectaron notorias incongruencias en las diligencias practicadas en la averiguación previa, ya que en el parte informativo, fe de cadáver, fotografías y acta circunstanciada, elaborada por el representante social federal, se señaló que [REDACTED] Lo anterior resulta inexacto, ya que la lesión que causó la muerte de [REDACTED] fue inferida en [REDACTED] no se le observó [REDACTED]; asimismo, con la fuerza motriz inherente al proyectil, al momento del contacto con la zona anatómica corporal e inercia que se genera entre el peso del arma, la fuerza de gravedad y el cambio de velocidad de los cuerpos involucrados, resulta que el lugar en el que se localizó y fijó el arma de fuego citada, no es compatible con una dinámica poslesiva secundaria a disparo de proyectil de arma de fuego que lesiona cráneo.

En consecuencia, la posición en la que se localizó la pistola no es la original ni inmediata al acontecer los hechos. Con esto, se demuestra una clara manipulación de las evidencias, maniobras que tienden a confundir y a desnaturalizar los hechos, con la pretensión de ocultar la verdad histórica.

Por lo señalado, y considerando la magnitud de la lesión, se tiene la duda razonable de que al momento de los hechos el hoy occiso empuñara un arma.

Tampoco resulta lógico lo manifestado por el señor [REDACTED] y [REDACTED] en el sentido de que [REDACTED], es decir, que observaron que [REDACTED] lo cual resulta exagerado, puesto que [REDACTED]; por lo tanto, [REDACTED]; sin embargo, sí coinciden en señalar que los hechos ocurrieron en el interior del cuarto de [REDACTED].

Luego entonces, con un alto grado de probabilidad, al hoy occiso, después de lesionado, le acercaron un arma a la mano y la accionaron, con el fin de que fuera positivo el resultado de la prueba de rodizonato de sodio que se le practicó, así como para confirmar la hipótesis del "enfrentamiento".

En el supuesto de que [REDACTED] hubiera disparado a los agentes de la Policía Judicial Federal, es de señalarse el criterio sostenido por el Poder Judicial Federal, en el sentido de que la detención ilegal puede llegar a constituir una agresión, ante la cual el ciudadano afectado tiene derecho a responder violentamente, lo que se corrobora con la siguiente resolución:

Aun cuando sea cierto que una persona haya disparado contra agentes de la Policía, también es verdad de que se configuran la defensa legítima si lo hace para salvaguardar su libertad, repeliendo la agresión o injerencia de que haya sido objeto en su esfera de derechos.

Así ocurre si los agentes de la Policía Judicial se hayan identificado como tales o no pretenden realizar la detención del inculcado, ya sea dentro de su domicilio, ya en una dependencia de éste, o, en fin, en la vía pública, y actúan en franca contravención a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, al carecer de la correspondiente orden de aprehensión en contra del inculcado, por lo cual la conducta de los agentes implica una actividad ilícita y constituye una agresión repelible a través de la legítima defensa.

Amparo Directo 1922/82, [REDACTED], 6 de abril de 1983. Mayoría de tres votos. Ponente: [REDACTED]. Disidente [REDACTED], séptima época: vols. 169174, segunda parte, p. 75 (visible a fojas 498 de la Compilación de Precedentes de la Primera Sala 1969-1985, Mayo Ediciones, 1987).

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, la actuación de los agentes de la Policía Judicial Federal no se justifica, puesto que, como ha quedado asentado, en las constancias remitidas por la autoridad no aparece una orden de aprehensión o de cateo, razón por lo cual se deben investigar estos hechos, ya que probablemente nos encontramos ante la presencia de un homicidio en agravio de [REDACTED] y el encubrimiento de este ilícito por parte de dichos servidores públicos, situación que contraviene lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225, fracciones VIII y XVIII; 227; 302 y 400, fracciones de la 11 a la IV, del Código Penal Federal; así como 123 del Código de Procedimiento Penal Federal. En este último precepto textualmente se señala:

123. Inmediatamente que el Ministerio Público Federal o los funcionarios encargados de practicar diligencias de Policía Judicial, tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas objeto o efecto del mismo; saber qué personas fueron testigos evitar que el delito se siga cometiendo y en general impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la aprehensión de los responsables en los casos de flagrante delito.

**C.** Esta Comisión Nacional considera que la actuación del licenciado [REDACTED], agente del Ministerio Público Federal que intervino en el operativo, fue contraria a Derecho, toda vez que omitió preservar el lugar de los hechos, ya que, según su dicho, [REDACTED] lo cual no es creíble, en virtud de que en [REDACTED] según testimonios, existen



aproximadamente seis viviendas, por lo tanto, la población debe ser escasa; aunado a que iba acompañado de varios grupos de agentes de la Policía Judicial Federal, además, los servidores públicos mencionaron que, [REDACTED], contraviniendo con ello el artículo 123 del Código de Procedimientos Penales en materia federal, transcrito anteriormente.

i) El agente del Ministerio Público Federal dio por cierto lo manifestado por los a-entes de la Policía Judicial Federal, sin hacer ningún tipo de pregunta y sin cuestionarlos sobre las más elementales circunstancias en que acontecieron los hechos; además, existe contradicción entre lo manifestado por éste y dichos agentes, ya que señaló: [REDACTED]

En este sentido, en el parte informativo los agentes señalaron la misma circunstancia, pero agregando que [REDACTED]; en consecuencia, existe una notoria contradicción con este hecho aislado.

ii) Por otro lado, el licenciado [REDACTED] indicó que [REDACTED] y al señor [REDACTED] a las [REDACTED] lo cual no es creíble, ya que éstos fueron presentados por los agentes de la Policía Judicial Federal y recibidos por el representante social federal de Uruapan, Michoacán, en calidad de presentados, lo cual es sin atentado a sus Garantías individuales, ya que la figura jurídica de retener o detener a alguna persona en calidad de presentada" no existe, por lo que se contravino lo establecido por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 225, fracción X, del Código Penal Federal, en los cuales se señala:

225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

Fracción X. Detener a un individuo durante la averiguación previa fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo del señalado por el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional.

**D.** Asimismo, la actuación del licenciado [REDACTED], agente del Ministerio Público Federal también fue irregular por las siguientes razones:

i) Recibió indebidamente en calidad de presentados al señor [REDACTED] y [REDACTED]

ii) Además, el 21 de octubre de 1994, decretó la detención le-al del [REDACTED] sin embargo, fue hasta el 23 de octubre de 1994 cuando lo remitió al Consejo Tutelar para Menores Infractores en el Estado de Michoacán, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, ya que debió de haberlo puesto de inmediato a disposición del comisionado en turno, en las instalaciones de la unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores.

iii) También, omitió formular cualquier tipo de interrogatorio a los agentes de la Policía Judicial Federal que firmaron el parte informativo, así como a los demás agentes que participaron en el operativo, y testigos de los hechos (familiares). Con ello, el representante social federal dejó de actuar conforme a Derecho, ya que eran necesarias, en el presente caso, las declaraciones minuciosas y detalladas de los participantes, las cuales hubieran contribuido en gran medida al esclarecimiento de las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que ocurrieron los hechos, contraviniendo lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

iv) Por otra parte, el agente del Ministerio Público Federal, al entrar al estudio del tipo y probable responsabilidad penal del delito de homicidio cometido en agravio de [REDACTED], señaló, entre otras cosas, que:

[...] con la conducta desplegada por los elementos de la Policía Judicial Federal, se encuentra amparada y protegida por la excluyente de incriminación (cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho), ya que éstos actuaron como servidores públicos, quienes trataron de ejecutar una orden de aprehensión, en el domicilio del occiso.

v) Asimismo, cabe señalar que el representante social federal, no obstante que solicitó se practicara a varias personas la prueba de rodizonato de sodio, dicha orden no fue cumplida, y solamente se practicó al señor [REDACTED] para justificar que éste disparó y que sí existió "el enfrentamiento".

En consecuencia, con el actuar de estos servidores públicos, se pone de manifiesto una actitud apartada de la verdad que conlleva a la pérdida de la credibilidad y en franca contravención con lo establecido por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 123 del Código de Procedimientos Penales en materia federal.

No pasa inadvertido para esta Comisión Nacional el señalamiento de la familia [REDACTED], en el sentido de que los agentes de la Policía Judicial Federal les sustrajeron dinero y objetos de valor de su domicilio; al respecto, es de señalarse que solamente existe la imputación directa de ellos, sin contar con otras evidencias que acrediten tal circunstancia.

Lo anterior no implica, de ningún modo, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se esté pronunciando sobre el fondo del proceso pena] 173/94, ya que esto no es, en ningún caso, atribución de este Organismo Nacional, el cual siempre ha manifestado un irrestricto respeto por las funciones del Poder Judicial.

Por lo expuesto, esta Comisión Nacional se permite formular respetuosamente a usted, señor Procurador General de la República, las siguientes:

## **V. RECOMENDACIONES**

PRIMERA. Se sirva girar sus instrucciones a fin de que se inicie un procedimiento interno de investigación, con objeto de determinar la posible responsabilidad administrativa en que hubiesen incurrido los licenciados [REDACTED] y [REDACTED], agentes

SEGUNDA. Asimismo, se sirva girar sus instrucciones a fin de que se inicie un procedimiento interno de investigación, con objeto de determinar la posible responsabilidad administrativa en que hubiesen incurrido los agentes de la Policía Judicial Federal [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

TERCERA. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública.

Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta Comisión Nacional dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación.

## Atentamente

18